

Señores

TRIBUNAL SUPERIOR DE CALI - SALA CIVIL

M.P.: Dr. Carlos Alberto Romero Sánchez

E. S. D.

DEMANDANTE: YENIFERTH LILIANA HENAO TORO Y OTROS

DEMANDADO: AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. Y OTROS

RADICADO: 2015-00007

ASUNTO: Réplica frente a la sustentación al recurso de apelación interpuesto por la parte actora.

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, me permito indicar que reasumo el poder a mí otorgado para actuar en calidad de apoderado de **AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.** -tal como se encuentra acreditado en el expediente-, y ejercer, dentro del término legal oportuno, mi derecho de réplica frente a la sustentación del recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte actora dentro del proceso de la referencia. Frente al cual manifiesto lo siguiente:

Frente al “Reparo No 1”:

Lo primero a mencionar frente a dicho reparo, es que el apelante equivocadamente advierte que el *A quo* “[s]e limitó a reconocer la suma correspondiente al lucro cesante futuro, desconociendo el lucro cesante consolidado solicitado. En la demanda se solicitó la suma de \$ 34.425.000 por lucro cesante consolidado y la suma de \$63.960.548 por concepto de lucro cesante futuro, sumando estas dos cifras arrojan la suma de \$98.385.548. La juez consideró que la suma de \$63.960.548 era toda la pretensión de lucro cesante cuando en realidad solo se refiere al lucro cesante futuro”. Si observamos el literal CUARTO de la sentencia recurrida, el Juzgador de instancia resolvió:

CUARTO: CONDENAR a los demandados **JAIRO ALEXANDER BSTIDAS CERÓN, HECTO ARTURO PAHÓN MORENO y RADIO TAXI AEROPUERTO S.A** a pagar solidariamente en favor de *Yeniferth Liliana Henao Toro*, por concepto de perjuicios patrimoniales en la modalidad de lucro cesante la suma de **\$72.947.176**.

No es cierto entonces que la Juez Quince (15) del Circuito de Cali haya reconocido la suma de \$63.960.548,00 por concepto de lucro cesante, así como tampoco es cierto que la Juzgadora haya desestimado lo pretendido en torno al perjuicio reclamado en la

modalidad de lucro cesante consolidado, toda vez que, remitiéndonos a la parte considerativa de la prementada sentencia, el *A quo* realiza una exposición de argumentos sobre la forma en la cual liquidará dicho perjuicio –tanto el consolidado como el futuro-, inclusive, dedica un acápite específico con el fin de explicar la forma en la cual liquidará y asignará el valor por concepto de lucro cesante consolidado, al respecto se observa:

S= suma calculada
Ra= \$942.525
n= 28.166 total meses incapacidad no continua entre el 31-03-12 al 9-04-15
i= 0,0004867
1. constante matemática

s= 942.525 x 1,0004867= 955.531
s= 31.851 = dividido x 30 para obtener valor diario
s= 26.914.131 valor total 845 días de incapacidad
s= 8.986.628 valor total aplicando el 33.39% de PCL.

Por concepto de lucro cesante consolidado el *A quo* reconoció a favor de la señora YENIFERTH LILIANA HENAO TORO la suma de OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS (\$8.986.628,00), por lo que resulta inadmisibile que el recurrente afirme que dicho rubro no fue reconocido por el Despacho en la sentencia.

Adicional a lo anterior, el recurrente centra sus argumentos afirmando que el *A quo* debió actualizar o indexar la pretensión de lucro cesante -refiriéndose al lucro cesante futuro-, toda vez que, la Juez de conocimiento limitó –en virtud del principio de congruencia- el valor reconocido a la señora YENIFERTH LILIANA HENAO TORO a la suma pretendida en el escrito de demanda, esto es, \$63.960.548,00.

Al respecto, resulta necesario referirme a que el principio de congruencia de la sentencia exige que esta deba estar siempre acorde con los hechos y las pretensiones esgrimidas en la demanda. Se encuentra contenido en el artículo 281 del Código General del Proceso¹ y establece lo siguiente:

“La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.

¹ Artículo 305 del Código de Procedimiento Civil.

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio.” (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

El principio de congruencia constituye una garantía al derecho fundamental al debido proceso, ya que garantiza que el juez únicamente se pronunciará sobre lo discutido, impidiendo que su fallo pueda ser *extra petita* o *ultra petita*, puesto que, la decisión se tomará de acuerdo a las pretensiones y excepciones probadas a lo largo del desarrollo del proceso. Garantiza además, en igual medida, el derecho fundamental a la defensa de las partes, ya que durante la oportunidad procesal respectiva podrán ejercer los mecanismos que la ley ha establecido para ello en los términos adecuados.

En concordancia con lo anterior, la jurisprudencia de la Corte Constitucional² ha definido en diferentes pronunciamientos el principio de congruencia como uno de los elementos constitutivos del derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, *“en la medida que impide determinadas decisiones porque su justificación no surge del proceso por no responder en lo que en él se pidió, debatió, o probó”*, razón por la cual, en el caso de que exista falta de congruencia en un fallo judicial, se configura un defecto que, permite que proceda la tutela contra providencia judicial con el fin de tutelar el derecho constitucional fundamental al debido proceso.

En igual sentido, la misma Corporación³ se ha pronunciado respecto a que la incongruencia puede configurar una vía de hecho cuando perjudica completamente los términos de referencia que sirvieron al desarrollo del proceso, generando una alteración sustancial dentro de la respectiva jurisdicción, que quiebra irremediablemente el principio de contradicción y el derecho de defensa, *“a tal grado que “la disparidad entre lo pedido, lo debatido y lo probado sea protuberante”, esto es, “carente de justificación objetiva y relativa a materias medulares objeto del proceso”*.

Resulta claro que el juez debe tomar su decisión de manera congruente con los hechos, pretensiones y excepciones probadas dentro del proceso, motivo por el cual, tiene prohibido proferir una sentencia en la que se pronuncie acerca de algo que no fue solicitado por las partes o en la que otorgue más de lo pedido, pues de esa manera garantiza, además, que se respete en todo momento el derecho de defensa de las partes involucradas, en el sentido en que permite hacer uso de cada una de las herramientas establecidas en la ley para ello.

² Sentencia T-714 de 2013, (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), que a su vez reitera lo dicho en las sentencias T-773 de 2008, (M.P. Mauricio González Cuervo); T-450 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) y T-025 de 2002, (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), entre otras.

³ Corte Constitucional, Sentencia T-450 de 2001 del 04 de mayo de 2001, Expediente D-404734, M.P.: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.

En este caso en concreto, tenemos que al observar el libelo demandatorio, la parte actora pretende el reconocimiento y pago por concepto de lucro cesante futuro la suma \$63.960.548,00, motivo por el cual, resulta plausible la decisión adoptada por la Juez Quince Civil del Circuito de Cali al determinar que el monto máximo a indemnizar por dicho concepto es el solicitado por el apoderado judicial de la parte demandante, pues de no ser así, se estaría contraviniendo el principio de congruencia, el cual como se ha manifestado, constituye una garantía al derecho fundamental al debido proceso. Además, resulta pertinente indicar que, en el hipotético caso en que llegase a prosperar el presente reparo, se generaría un rubro injusto a favor de la parte demandante, lo cual, al no tener justificación legal o contractual alguna, derivaría en un enriquecimiento sin causa, figura que es prohibida en nuestra legislación.

Frente al “Reparo No 2”:

El artículo 1613⁴ del Código Civil nos indica que el detrimento patrimonial está integrado por el daño emergente y el lucro cesante. Al respecto, el daño emergente⁵ consiste en la pérdida efectiva –bien sea pasada, presente o futura- de un bien económico que se encontraba en el patrimonio de la víctima -determinado o determinable-. Este puede concretarse en la persona o en sus bienes. En el primer evento, la lesión ocurre en la persona –su integridad física-, por lo que comprende el daño emergente todos aquellos gastos –patrimoniales- necesarios para poner a la víctima en las mismas condiciones en que se encontraba antes del hecho dañoso. Y, en el segundo evento, la lesión ocurre o afecta una cosa, por lo que el mismo se concreta en los emolumentos necesarios para reparar la cosa.

En palabras de la Corte Suprema de Justicia, “[e]l daño emergente abarca la pérdida misma de elementos patrimoniales, los desembolsos que hayan sido menester o que en el futuro sean necesarios y el advenimiento del pasivo, causados por los hechos de los cuales trata de deducirse la responsabilidad (...)” (CSJ, SC del 28 de junio de 2000, Rad. n.º 5348).

Ahora bien, en el caso que nos atañe resulta claro y evidente que la parte actora nunca logró demostrar pérdida cierta alguna sobre su patrimonio, en el sentido que, no probó que ella misma haya sido quien sufragó los gastos comprendidos en dicho concepto de

⁴ **ARTICULO 1613. <INDEMNIZACION DE PERJUICIOS>**. La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y lucro cesante, ya provenga de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento.
Exceptuánse los casos en que la ley la limita expresamente al daño emergente.

⁵ **ARTICULO 1614. <DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE>**. Entiéndese por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento.

daño emergente –por ejemplo, insumos médicos, transporte y reparaciones del vehículo-, por lo que, desde dicha perspectiva resulta acertada la posición adoptada por el *A quo* al no reconocer suma alguna en torno al perjuicio reclamado en la modalidad de daño emergente. Es por ello que, no resulta justificado de manera alguna el reparo que realiza el recurrente al manifestar que el *A quo* debió liquidar el daño emergente con fundamento en criterio de equidad para cumplir supuestamente el principio de reparación integral, pues como ya se manifestó, es requisito para su reconocimiento el que esté plenamente probado que se haya ocasionado –ciertamente- una pérdida efectiva de un bien económico que se encontraba en el patrimonio de la víctima, situación que, del acervo probatorio obrante dentro del proceso no se pudo acreditar dicha pérdida efectiva, pues no fue posible comprobar que la víctima haya siquiera sufragado -con su patrimonio- alguno de los supuestos gastos en lo que incurrió originados en el hecho lesivo.

Frente al “Reparo No 3”:

Entre mi representada y RADIO TAXI AEROPUERTO S.A. se concertó el contrato de seguro documentado en el Certificado No. 0 de la Póliza de Responsabilidad Civil R.C.E. Trans. Servicio Público de Pasajeros (No Adm.) No. 8001051733, en la cual se encontraba asegurado el vehículo de placas VCQ369 para la vigencia comprendida entre el 18 de diciembre de 2011 y 18 de diciembre de 2012.

No obstante lo anterior, la prementada póliza se concertó bajo la modalidad de cobertura de ocurrencia con una cláusula conocida en derecho comparado como *clause sunset*, la cual, es una cláusula de extinción en cuanto establece una fecha de expiración de la cobertura de los reclamos que se realicen, dejando al margen de protección contractual cualquier reclamo que se reciba después de vencido ese término, que para este caso específico fue acordado en dos (2) años.

Como se manifestó, la modalidad de cobertura pactada en el Certificado No. 0 de la Póliza de Responsabilidad Civil R.C.E. Trans. Servicio Público de Pasajeros (No Adm.) No. 8001051733, obedece a la modalidad de ocurrencia, limitándose el amparo únicamente a los eventos que ocurrieran dentro de la vigencia respectiva del contrato de seguro, y, siempre y cuando el reclamo o la demanda al asegurado o AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. fuese formulado por el damnificado o los terceros –supuestamente afectados-, dentro del término pactado de los dos (2) años siguientes a la ocurrencia de los hechos que motivaron la reclamación o la demanda respectiva. Lo anterior, tiene pleno

sustento legal en el inciso segundo del artículo 4⁶ de la Ley 389 de 1997, al estipularse que:

“[s]e podrá definir como cubiertos los hechos que acaezcan durante la vigencia del seguro de responsabilidad siempre que la reclamación del damnificado al asegurado o al asegurador se efectúe dentro del término estipulado en el contrato, el cual no será inferior a dos años.”

Conforme a lo anterior, no puede el recurrente afirmar que se trata de una cláusula abusiva, pues la misma tiene sustento legal en el artículo 4 de la Ley 389 de 1997, y constituye un acuerdo comprendido dentro del principio de la autonomía privada de la voluntad y de la libertad contractual.

Ahora bien, cualquier reclamo que se formule con posteridad al fenecimiento del lapso acordado –el cual fue de dos (2) años- no está cubierto por la póliza.

Se observa en el **CAPÍTULO I AMPAROS Y EXCLUSIONES** de las condiciones generales de la póliza, la delimitación temporal de los riesgos asumidos:

“[C]ON BASE EN LO PRESCRITO EN EL ART. 4º. DE LA LEY 389 DE 1997, LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL AMPARADA EN ESTA POLIZA, SE REFIERE A HECHOS ACAECIDOS DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE SEGURO, SIEMPRE QUE LA RECLAMACIÓN DEL DAMNIFICADO AL ASEGURADO O A COLPATRIA SE EFECTUE DENNTRO DE LOS DOS (2) AÑOS SIGUIENTES A DICHA OCURENCIA.

EL SEGURO TIENE COMO OBJETO EL RESARCIMIENTO DE LA VÍCTIMA O SUS CAUSAHABIENTES, LOS CUALES SE CONSTITUYEN EN BENEFICIARIOS DEL SEGURO Y TIENEN ACCION DIRECTA PARA RECLAMAR LA INDEMNIZACION A COLPATRIA, SIN PERJUICIO DE LAS PRESTACIONES QUE DEBA RECONOCER DIRECTAMENTE EL ASEGURADO. (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

De la cita anterior, tenemos que tal y como se pactó en el respectivo condicionado particular, lo acordado en el contrato de seguro documentado en la Póliza de Responsabilidad Civil R.C.E. Trans. Público de Pasajeros (No Adm.) No 8001051733 -

⁶ **ARTICULO 4o.** En el seguro de manejo y riesgos financieros y en el de responsabilidad la cobertura podrá circunscribirse al descubrimiento de pérdidas durante la vigencia, en el primero, y a las reclamaciones formuladas por el damnificado al asegurado o a la compañía durante la vigencia, en el segundo, así se trate de hechos ocurridos con anterioridad a su iniciación.

Así mismo, se podrá definir como cubiertos los hechos que acaezcan durante la vigencia del seguro de responsabilidad siempre que la reclamación del damnificado al asegurado o al asegurador se efectúe dentro del término estipulado en el contrato, el cual no será inferior a dos años.

PARAGRAFO. El Gobierno Nacional, por razones de interés general, podrá extender lo dispuesto en el presente artículo a otros ramos de seguros que así lo ameriten.

respecto a su cobertura-, opera solo si concurren simultáneamente los siguientes requisitos: **(i)** que los hechos ocurran durante la vigencia de la póliza; y, **(ii)** que se haya reclamado durante la vigencia de la póliza o durante los dos (2) años siguientes a su terminación. Dicha delimitación referida en el último de los requisitos, resulta evidente que se incluye como exclusión.

Con relación a este caso en particular, y de conformidad con la documentación que obra dentro del expediente, se tiene que, si bien los hechos a los que alude la demanda se encuentran enmarcados dentro de la vigencia de la póliza -31 de marzo de 2012-, el reclamo a la asegurada se configuró con la demanda -19 de diciembre de 2014-, es decir, más de dos (2) años de la ocurrencia de los hechos. Desde dicha perspectiva, y teniendo en cuenta los requisitos que deben concurrir simultáneamente para que sea efectiva la cobertura de la póliza ya referenciada, no podría ser objeto o sustento de obligación de indemnización a cargo de mi representada, pues al no cumplirse con el segundo de los requisitos **-(ii)** que se haya reclamado durante la vigencia de la póliza o durante los dos (2) años siguientes a su terminación- y en virtud de la autonomía de la voluntad de las partes que suscribieron el contrato de seguro y aceptaron la inserción dentro del contrato de este tipo de cláusula, no podría afectarse de ninguna manera, ya que la reclamación se realizó por fuera del período de vigencia de la póliza.

Es por lo anteriormente expuesto que se puede determinar que el *A quo* resolvió acertadamente la situación jurídica de mi representada AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. dentro del proceso de la referencia, al negar las pretensiones de la demanda y del llamamiento en garantía frente a ésta, pues no asiste razón alguna a la parte recurrente el afirmar que el contenido de la póliza suscrita contiene una cláusula abusiva frente a la cual evidentemente no lo es, y que además, confunde enormemente al denominarla como *claims made*, la cual, es una modalidad de cobertura distinta a la que se concertó en el contrato de seguro documentado en el Certificado No. 0 de la Póliza de Responsabilidad Civil R.C.E. Trans. Servicio Público de Pasajeros (No Adm.) No. 8001051733. Asimismo, incurre en error al enmarcar los reparos descritos dentro de unos criterios netamente subjetivos apoyados en definiciones y/o conceptos jurídicos de los cuales no confronta ni justifica argumentativamente su aplicación.

Frente al “Reparo No 4”:

Bien lo refiere la parte recurrente al considerar que por haberse proferido fallo NEGANDO las pretensiones de la demanda y del llamamiento en garantía frente a AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., no da lugar si quiera a que el Juzgador de instancia se pronuncie sobre el supuesto pago de intereses moratorios del que trata el artículo 1080 del Código de Comercio. Así las cosas, reitero el pronunciamiento realizado frente al **“Reparo No 3”** en el sentido de determinar que el *A quo* resolvió acertadamente la situación jurídica que

enmarca a mi representada dentro del proceso de la referencia, por lo tanto, la consecuencia lógica a seguir es tampoco de lugar al presunto reconocimiento de interés moratorio alguno.

Frente al “Reparo No 5”:

En el hipotético e improbable caso en que se considerara que nace algún tipo de obligación indemnizatoria a cargo de AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., la misma debe sujetarse al tenor literal de las condiciones particulares y generales de la Póliza de Responsabilidad Civil R.C.E. Trans. Público de Pasajeros (No Adm.) No 8001051733, entre ellas, la suma máxima a la cual estaría eventualmente obligada mi representada.

Al respecto, dispone el artículo 1079 del Código de Comercio que:

*“RESPONSABILIDAD HASTA LA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA. **El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada**, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074.”* (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

Asimismo, el artículo 1089 del prementado Código promulga:

“LÍMITE MÁXIMO DE LA INDEMNIZACIÓN. Dentro de los límites indicados en el artículo 1079 la indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario.

Se presume valor real del interés asegurado el que haya sido objeto de un acuerdo expreso entre el asegurado y el asegurador. Este, no obstante, podrá probar que el valor acordado excede notablemente el verdadero valor real del interés objeto del contrato, mas no que es inferior a él.”

De acuerdo con lo anterior, en el evento de proferirse una condena contra mi representada, esta se verá condicionada a los valores asegurados en el contrato y a los deducibles pactados en el mismo. Además, la responsabilidad máxima del asegurador se limita a la suma asegurada, de manera que ese es el tope de la responsabilidad asumida por la aseguradora, siempre y cuando se compruebe primero que se cumplió la condición de la que nació su obligación de indemnizar y obviamente el daño y la cuantía de este.

En relación con la Póliza de Responsabilidad Civil R.C.E. Trans. Público de Pasajeros (No Adm.) No 8001051733, es importante señalar que el límite máximo de la compañía fue establecido en las condiciones generales de la póliza, así:

“CAPITULO III CONDICIONES APLICABLES A TODO EL CONTRATO

3.1 LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD

La máxima responsabilidad de Colpatria en este seguro, lo constituyen los valores o límites asegurados por amparo consignados en la carátula de la póliza.

Las coberturas otorgadas en los amparos descritos en la póliza operan en exceso de las prestaciones otorgadas por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y del Sistema General de Seguridad Social en Salud y el Sistema General de Riesgos Profesionales.”

En efecto, para predicar algún tipo de obligación en virtud de la Póliza de Responsabilidad Civil R.C.E. Trans. Público de Pasajeros (No Adm.) No 8001051733, se deberán tener en cuenta los límites máximos de responsabilidad civil extracontractual plasmados en ella:

AMPAROS CONTRATADOS	VALOR ASEGURADO
R.C.E. TRANS. DE PASAJ. SERV. PUBLICO – DAÑOS A BIENES	32,136,000.00
<i>Deducible: 10.00 POR CIENTO SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MÍNIMO 2.00 SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA</i>	
MUERTE O LESION DE UNA PERSONA	32,136,000.00
MUERTE O LESION DE DOS O MAS PERSONAS	64,272,000.00
AMPARO PATRIMONIAL	0.00
GASTOS DE DEFENSA	0.00
(...)	
PLACAS: VCQ-369	
NOTA: SE ACLARA QUE LA COBERTURA DE PERJUICIOS MORALES ES DEL 20% DEL VALOR ASEGURADO.	

De conformidad con lo anterior, no se puede desconocer que las obligaciones de la aseguradora están estrictamente sujetas a sus condiciones particulares y generales, enmarcadas dentro de los límites asegurados y a la demostración (por parte del beneficiario) del perjuicio alegado y su cuantía, siempre y cuando no se configure una causal legal o convencional de inoperancia del contrato de seguro.

Resultaría inviable desde todo punto de vista pretender modificar la suma asegurada con ocasión a una supuesta “actualización en virtud de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda que afecta indudablemente a la cobertura de la póliza”. Pues no solo generaría un desequilibrio económico frente a mí representada, sino también se desconocería y vulneraría por completo el principio de autonomía de la voluntad de las partes, pues al haber suscrito el respectivo contrato de seguro conforme a unas estipulaciones -frente a las cuales hubo acuerdo de voluntades- y frente al cual, se pretende una modificación unilateral no acordada dentro del mismo, implicaría el desconocimiento pleno y la razón de ser de suscribir un contrato de seguro, pues no habría certeza para la aseguradora sobre las condiciones generales y particulares que incluyen el interés asegurable y el valor a indemnizar en el caso de presentarse un siniestro.

Así, lo solicitado por la parte actora respecto a la actualización de la cobertura de la póliza con base en el desconocimiento de las condiciones generales y particulares que se circunscriben a la relación contractual entre mi representada y RADIO TAXI

AEROPUERTO S.A. documentada en la Póliza de Responsabilidad Civil R.C.E. Trans. Público de Pasajeros (No Adm.) No 8001051733, debe ser ignorada por éste Juzgador, en tanto constituye una clara violación al principio de libertad contractual, pues modificaría los derechos y obligaciones acordadas en el contrato de seguro. Además, que desconocería lo preceptuado en el artículo 1079 del Código de Comercio, conforme al cual el asegurador está obligado a responder únicamente hasta la ocurrencia de la suma asegurada –sin perjuicio del carácter meramente indemnizatorio de esta clase de pólizas, en la cuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 1088 ibídem, los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituirse en fuente de enriquecimiento-.

Cabe igualmente reseñar que, que el valor asegurado de \$32.136.000,00 para el amparo de otorgado, opera en exceso de las prestaciones otorgadas por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y del Sistema General de Seguridad Social en Salud y el Sistema General de Riesgos Profesionales.

Es por lo anteriormente expuesto que, en el hipotético e improbable caso en que se considerara que prospera algún tipo de obligación indemnizatoria a cargo de AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., resultaría completamente inviable acceder a lo pretendido por el recurrente en este reparo, pues, no solo contravendría las normas generales que regulan la relación de las partes involucradas en el contrato de seguro, sino también, sería una vulneración directa contra los principios de la libertad contractual y la autonomía de la voluntad.


PETICIÓN

Una vez ejercido el derecho de réplica frente a la sustentación al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, muy amablemente le solicito, señor Magistrado, se atiendan los argumentos expuesto por el aquí suscrito y en concordancia se CONFIRME la sentencia de primera instancia con fecha del 04 de septiembre de 2019.

NOTIFICACIONES

Al suscrito en la Avenida 6 A Bis No. 35N-100 Oficina 212 Centro Empresarial Chipichape en la ciudad de Cali o al correo electrónico notificaciones@gha.com.co

Atentamente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA
C.C. No. 19.395.114 de Bogotá D.C.
T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.